

Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo el abogado don Daniel Ibáñez Gandolfo, en representación de la reclamante “Hook S.A.”, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de esta ciudad.

Segundo: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción a lo dispuesto en el artículo único de la Ley N° 18.320.- inciso 1° y en su numeral 4°, que establece normas que incentivan el cumplimiento tributario y, además, el inciso tercero del artículo 59 del Código Tributario.

En relación a tal infracción expone básicamente el recurrente que la sentencia impugnada incurre en tal infracción ya que en el reclamo tributario que dicha parte interpuso, se pidió declarar judicialmente la nulidad de las Liquidaciones N° 13 a 17, ambas incluidas, de fecha 25 de marzo de 2019, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (D.L. 825), y por concepto de Renta, por Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Único del artículo 21 del DL 824 (Ley sobre Impuesto a la Renta), y que estando su representada desde antes de la fecha de las Liquidaciones sin continuidad operacional, no concurrió en tiempo a la notificación. Con ocasión de ello, el SII emitió una citación, extendiendo su fiscalización al amparo de la Ley 18.320, al Impuesto a la Renta, y acto seguido emitió las Liquidaciones 13 a 17, reclamadas de nulidad porque se practicaron fuera del plazo legal y fatal de 6 meses contemplado en el numeral 4° del Artículo Único de la Ley 18.320; además, por



no haber existido en las liquidaciones un desarrollo y explicación de la mecánica de cálculo de los tributos; y, porque se extienden a impuestos a la renta distintos de aquellos que pueden ser fiscalizadas conforme a la Ley 18.320.

Indica que, no obstante, la sentencia de primera instancia rechazó en todas sus partes el reclamo, sosteniendo que el plazo de 6 meses que establece la ley confiere alternativas al SII, y que no son requisitos copulativos el citar y liquidar dentro del plazo legal; y, además, respecto de las liquidaciones por Impuesto a la Renta emitidas contra el contribuyente reclamante, del tenor literal del inciso primero del Artículo Único de la Ley 18.320 se obtiene que en ningún caso puede llegar a significar que al iniciarse una fiscalización en el marco de la Ley 18.320, el SII esté “*renunciando a fiscalizar el impuesto a la renta*” (Considerando 24°).

Asimismo dentro de esta misma infracción cuestiona que la Corte de Apelaciones de Santiago hubiese mantenido lo resuelto pues con ello desatiende el sentido natural y obvio del artículo único de la referida Ley 18.320; sostener que en el procedimiento especial y exclusivo de fiscalización de los impuestos contemplados en la Ley del IVA en virtud de una ley especial, se puede y es lícito someter al contribuyente a una revisión sobre Impuesto a la Renta, incluso, después de haber sido notificado; y, contravenir del texto formal del inciso 3° del artículo 59 del Código Tributario, que impide expresamente a la autoridad tributaria fiscalizar al contribuyente por impuestos diferentes a los que han sido objeto de un proceso de fiscalización ya iniciado en su contra. Con lo que se habría dado una solución jurisdiccional a la disputa, contraria a derecho.



Tercero: Que no obstante lo anterior, para una adecuada comprensión del asunto, es conveniente precisar que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la reclamación de nulidad de las Liquidaciones N° 13 a N° 17 por estimar que la citación del Servicio es válida por haber sido realizada dentro de plazo; porque son válidas al haber sido realizadas dentro del plazo de prescripción; porque tienen suficiente fundamento de hecho y derecho; y, porque la Ley N° 18.320 no impide al Servicio que, dentro del plazo de prescripción, se determine una diferencia de impuesto a la renta.

Cuarto: Que conviene tener presente que el considerando vigésimo cuarto de la sentencia de primera instancia-citado por el recurrente en su libelo y que fue confirmado por el fallo que en esta oportunidad se revisa- refiere que la Ley N° 18.320 no impide al Servicio que, dentro del plazo de prescripción, se determine una diferencia de impuesto a la renta, dado su tenor, que cita, interpretando que el SII debe regirse por las reglas que a continuación estipula, si su meta es fiscalizar el impuesto a las ventas y servicios, lo que de ningún modo significa que al iniciar una fiscalización regida por las normas de esa ley el Servicio esté “renunciando” a fiscalizar el impuesto a la renta, habiendo indicado en su considerando noveno que coincide con la postura del Servicio, en que el plazo de 6 meses permite al SII realizar una de tres actuaciones: citar, liquidar o girar, sin que la ley no le indique qué debe hacer, sino que le da opciones, y, tal como lo reconoce la reclamante, se ha ejercido una: la citación.

De tal manera, en el arbitrio no se vislumbra ninguna denuncia a la infracción a la sana crítica y menos aún a alguno de los principios que la



componen, razones que hacen de suyo que el libelo contenga un vicio que haga imposible que sea acogido a tramitación.

Quinto: Que de una atenta lectura del recurso, amén de la transcripción de las normas que entiende infringidas así como las que entrelaza con disposiciones de diferentes cuerpos legales para poder entender a su juicio configurados los errores de derecho que denuncia, lo cierto es que el recurrente manifiesta más que nada su disconformidad con lo resuelto, no llevando a cabo un desarrollo en los términos del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la vulneración a los preceptos legales que entiende infringidos; lo que constituye una razón adicional que permite el rechazo del recurso en cuenta, por manifiesta falta de fundamento.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 12.670-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.





En Santiago, a trece de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

